

*Henry Ferrer Florián Delgadillo**

COLOMBIA Y MÉXICO: UNA MIRADA RETROSPECTIVA A LA VIOLENCIA ARMADA Y AL NARCOTRÁFICO EN ESTAS NACIONES**

COLOMBIA AND MÉXICO: A RETROSPECTIVE LOOK AT ARMED VIOLENCE
AND DRUG TRAFFICKING IN THESE NATIONS

COLÔMBIA E MÉXICO: UM OLHAR RETROSPECTIVO SOBRE A VIOLÊNCIA
ARMADA E O TRÁFICO DE DROGAS NESSES PAÍSES

RESUMEN

El fenómeno del narcotráfico aparece como detonante de la realidad colombiana y la mexicana, al punto de pretender establecerse como modelo que permea los imaginarios sociales tras ser aceptado como alternativa frente a la falta de oportunidades consecuencia del ausentismo estatal. Los factores detonantes, las

manifestaciones y consecuencias sociopolíticas, así como los enmarañados lazos entre el narcotráfico de los dos países, son escenarios de reflexión y debate académico en prospectiva de paz.

Palabras clave: imaginario social, narcotráfico, resiliencia, violencia armada.

* Colombiano. Estudiante de licenciatura en Filosofía, Ética y Valores Humanos de la Universidad Santo Tomás, Villavicencio (Colombia). Docente de filosofía del Colegio Don Bosco de Villavicencio (Colombia). Estudiante del Grupo de Investigación Nakota (<https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000019947>), adscrito a la Universidad Santo Tomás, Villavicencio (Colombia). E-mail: henryflorian@ustadistancia.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0841-9311>. CVLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000024661.

** Este artículo surge de una ponencia presentada en la Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTEC) del Estado de Hidalgo en Mexico en el mes de octubre de 2019.

ABSTRACT

The phenomenon of drug trafficking appears as a trigger for Colombian and Mexican reality, to the point of trying to establish itself as a model that permeates social imaginary, being accepted as an alternative to the lack of opportunities that result of state absenteeism. The trigger factors, the socio-political manifestations and consequences, as well as the tangled ties between drug trafficking in the two countries, are scenarios for reflection and academic debate in prospect of peace.

Keywords: armed violence, drug trafficking, social imaginary, resilience.

RESUMO

O fenômeno do narcotráfico aparece como um gatilho para a realidade colombiana e mexicana, a ponto de tentar se estabelecer como um modelo que permeia o imaginário social, sendo aceito como alternativa à falta de oportunidades, em decorrência do absentismo estatal. Os gatilhos, manifestações e consequências sociopolíticas, bem como os emaranhados entre o narcotráfico nos dois países, são cenários de reflexão e debate acadêmico na paz em perspectiva.

Palavras-chave: violência armada, tráfico de drogas, imaginário social, resiliência.

DESDE LOS ORÍGENES

Las primeras alarmas sobre el problema de las drogas ilícitas se remiten a finales del siglo XIX cuando por primera vez los médicos se percataron de las posibles dependencias que genera el consumo de sustancias alucinógenas como el opio, la morfina y la heroína; incluso, desde el ámbito religioso se prohibió el consumo de alcohol y narcóticos (Sáenz, 1996).

A partir de este momento, son muchos los encuentros a escala mundial para dialogar y establecer estrategias para la prevención del consumo; las primeras fueron realizadas en Shanghái y en La Haya (Sáenz, 1996). Sin embargo, el punto de partida del actual conflicto por temas de narcotráfico en México y en Colombia es el cambio del rol que a inicios del siglo XX jugaba Estados Unidos, pues el problema ya no se centró en el consumo de opioides y marihuana, sino en su producción; de este modo, toda la responsabilidad recayó en las naciones productoras, generando una cultura en torno al narcotráfico.

Estados Unidos no se centra en la prevención y en el tratamiento del consumo, son los países latinoamericanos los que tienen que asumir la lucha (Fernández-Montesinos, 2017). Esto sucede para el año 1973, pero la decisión no se toma con respecto a los cultivos de amapola que estaban asentados en Asia, sino para los de marihuana, establecidos en Jamaica y en México, donde se realizaron dos operaciones en años consecutivos¹ cuyo resultado fue el traslado de los cultivos a Colombia.

Según la versión histórica, en 1974, por La Guajira colombiana entró el primer embarque de marihuana al estado de Florida (García, 2010). Para esta época, el 80% de los agricultores de La Guajira cultivaban mayoritariamente la marihuana, como

1 La operación Bucanero en lo que respecta a Jamaica en 1974 y la operación Cóndor en 1975 en México.

consecuencia de las propiedades de dicha planta en el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta, descubiertas por estadounidenses, quienes se convirtieron en los primeros traficantes de este producto desde Colombia hacia Estados Unidos. Además, la “ventana siniestra” del Banco de la República, como se le denominó al mecanismo establecido por el gobierno de López Michelsen, permitía cambiar dólares por pesos colombianos; fue el instrumento a través del cual se nacionalizaron los capitales del negocio del narcotráfico. Estos fueron los tiempos de la “bonanza marimbera” que inició en 1975 y se prolongó hasta 1985 (Puente, 2008).

En palabras de Fernández-Montesinos (2017), todas las organizaciones criminales poseen una identidad propia que permite hacer una lectura profunda de su estructura. Se trata de cinco elementos clave: el negocio es altamente rentable; la estructura criminal por lo general se basa en familias o en grupos comunitarios; la violencia impuesta a la fuerza como instrumento de control social; la corrupción por seducción o por amenazas de acciones violentas en contra de quienes no participan; y finalmente, la desproporcionada relación entre Estados Unidos como destino de las drogas y países como México y Colombia en su rol de productores. Todo lo anterior agravado por un Estado de Derecho con fallas estructurales, fundamentado en una comprensión contractualista de la justicia (Nieto y Pardo, 2018).

COLOMBIA EN SU AÑO MÁS OSCURO

Durante 1989, Colombia vivió lo más crudo de la violencia a causa del narcotráfico, siendo un Estado totalmente dominado por las fuerzas del Cartel de

Medellín, ciudad donde reinaban el pánico y la zozobra. El país, ante la ola de violencia desatada, era muy poco lo que podía hacer para mantener su Estado de Derecho. Estaba totalmente sumido bajo el dominio y el terror que despertaban Pablo Escobar y su cartel, quienes a punta de asesinatos y dinamita, le habían declarado la guerra a Colombia.

La violencia saltó de los campos a la ciudad con la complicidad de la institucionalidad. Una parte del Estado estaba infiltrado por el narcotráfico, lo cual debilitaba considerablemente sus fuerzas. El Estado se encontraba muy cerca de rendirse frente a la arremetida del Cartel de Medellín, que entre sus propósitos tenía someter al Gobierno e impulsar una Constituyente acomodada a sus intereses, y aquellos que por esa época se atrevieron a contradecirlos perecieron a manos del terror, teniendo en cuenta que la política criminal no es neutra y por lo general obedece a intereses particulares que benefician a algunos y perjudican a otros (García, 2010).

“Colombia es un país que todos los días está al borde de perecer”, señaló Luis Carlos Galán, uno de los íconos de la fuerza que se opuso a los poderes oscuros del narcotráfico en Colombia. Sus actos y su valor de enfrentar al Cartel de Medellín ofrecieron una luz de esperanza de cara a las nuevas elecciones presidenciales; él era el candidato con mayor opción y concentraba los componentes de carisma, tradición y legalidad, además de voluntad y vocación de servicio a la sociedad, lo que lo configuraba como un líder original en el país (Roa, 2009).

Galán era la antítesis de las pretensiones del Cartel de Medellín y era un hombre que manifestaba no temerles a los narcotraficantes. Esta fue la causa de su asesinato, en medio de un complot que involucró a agentes del DAS², a estamentos del Gobierno

2 Departamento Administrativo de Seguridad, una policía estatal encargada de enfrentar a los carteles del narcotráfico en Colombia; sin embargo, dicha entidad se vio envuelta en escándalos de corrupción y complicidad en asesinatos de personajes de la política del Estado colombiano.

y a paramilitares al mando de Henry de Jesús Pérez, quienes fraguaron el crimen que se cometió el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha, Cundinamarca, mientras el político se disponía a dar su discurso ante una multitud de espectadores que lo acompañaban. Entre dicha multitud estaban los que llevaron a cabo el atentado contra su vida (Roa, 2009).

TRES DÉCADAS DE RESISTENCIA Y RESILIENCIA

Resistencia y resiliencia guardan una profunda cercanía por los contextos en los que se desarrollan e influyen a las personas. Mientras que la primera hace referencia a un desplegar la fuerza en términos de poder de afirmación que potencia la vida, que es pacifista, es decir, sin violencia (González et al., 2011), la segunda trata de la superación de situaciones adversas, pero en este caso, se hace de la mano con otros, cuya acción es definitiva para superarlas y dar una respuesta positiva a la sociedad (Puerta y Vásquez, 2012). Tales situaciones son una realidad de los pueblos asociados con el narcotráfico.

En México se dan los primeros sucesos que marcan definitivamente el camino del ascenso de los carteles, en especial el de Sinaloa, comandado por el Chapo Guzmán, quien fuese capturado por los generales Jorge Carrillo Olea y Guillermo Álvarez Nahara, acompañados de dos batallones, en un penoso hecho para el ejército Mexicano; quien lo entregó fue un joven capitán del ejército guatemalteco, que no tuvo el mayor reparo en protocolos, encargado de entregar al inculcado por el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, mientras se

enfrentaba con los hermanos Arellano Félix en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco (Hernández, 2010).

En el contexto colombiano, surge una reacción frente a la escalada terrorista del Cartel de Medellín y es la aparición del movimiento estudiantil de la séptima papeleta³, que se convirtió en el hecho más trascendental para dar paso a la transformación política más importante en la historia de Colombia: la Constitución de 1991. Este movimiento contribuyó significativamente con la transformación del país, impulsó una Constitución que dio respuesta a las necesidades de la época y logró que el país fuera más democrático, participativo y pluralista (Gómez, 2011).

La Constitución de 1991 fortaleció al Estado colombiano y le brindó las herramientas suficientes para actuar frente a la escalada terrorista del Cartel de Medellín, que desde 1989 había cobrado fuerza.

Es necesario tener en cuenta el enorme beneficio de la actualización de las bases constitucionales de un Estado, que responda al contexto y a las exigencias propias de la época, y brinde las herramientas suficientes para enfrentar sus principales problemas. En algunos casos, es más efectivo su cambio que las reformas que se le puedan hacer a la carta magna estatal.

Los poderes que adquirió el Estado colombiano en materia de lucha contra el narcotráfico a partir de la nueva carta magna impulsaron una reacción estatal en contra del Cartel de Medellín, tras el intento fallido de un proceso de judicialización de Pablo Escobar y sus más cercanos lugartenientes, en un episodio penoso para la justicia colombiana

3 Se llamó así porque en las elecciones de marzo de 1990 los ciudadanos colombianos debían llevar a las urnas unas papeletas para su voto, eran seis en total. El profesor de Derecho Fernando Carrillo propuso la posibilidad de una séptima papeleta para que los colombianos convocaran la Constituyente; la cantidad de votos a favor no estuvo determinada, pero el objetivo se cumplió fruto del esfuerzo de jóvenes bachilleres y universitarios del país.

que tuvo lugar en “La Catedral”⁴. Ante la barbarie causada por Escobar en el país, surgieron los “Pepes”⁵, quienes reaccionaron violentamente en contra del capo, sus familiares y amigos cercanos; una lucha que no terminó hasta que fue dado de baja por el Estado colombiano, el 2 de diciembre de 1993 en Medellín (Gómez y Sánchez, 2008).

Lejos de terminar con el flagelo del narcotráfico, la muerte de Escobar en Colombia generó una disputa por el dominio del gran imperio de la droga, ahora sin cabeza visible; capos de otros carteles, guerrillas y paramilitares iniciaron una carrera por el control total del negocio y a la par, la influencia de dicho fenómeno salpicó las altas esferas de la política colombiana como nunca antes.

Esto se hizo evidente en las elecciones presidenciales del periodo 1994-1997, en las que, según datos de la Fiscalía, los aportes del narcotráfico para la campaña de Ernesto Samper fueron de más de 4000 millones de pesos, lo cual permitió ver que la corrupción política en Colombia no tenía límites. De esta manera, nació el proceso 8000⁶ en 1995 y tras dos años de investigaciones, se pusieron tras las rejas a congresistas, un procurador, un excontralor y a los testaferros del Cartel de Cali. En este caso, el Estado dejó de cumplir sus funciones relacionadas con el orden y la ley para convertirse en una herramienta del delito (Méndez, 2009).

Tras este acalorado escenario en la política colombiana, el periodo presidencial 1998-2001 fue asumido por Andrés Pastrana y con él comenzó una

etapa de negociaciones con el grupo guerrillero de las FARC-EP, quienes hasta esa época se dedicaban a custodiar las zonas donde los capos del narcotráfico mantenían sus cultivos ilícitos. Ante su ausencia, heredaron el poder de dicha actividad y asumieron el control del narcotráfico en estas zonas.

Las negociaciones con las FARC-EP iniciaron en Caquetá, lugar donde la única moneda de cambio era la cocaína; era un escenario de olvido del país donde la ausencia del Estado era mucho más marcada y cualquier tipo de servicio era pagado con gramos de cocaína (Gómez y Sánchez, 2008). Para este tiempo, se inició una movilización sin precedentes de la guerrilla hacia San Vicente del Caguán y otros cuatro municipios en lo que se llamó la Zona de Distensión, un escenario perfecto para que la guerrilla se fortaleciera.

Lejos de lograrse un acuerdo de paz, las negociaciones con las FARC se rompieron y ante la llegada a la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez, la avanzada del Gobierno contra este grupo insurgente trajo consigo una nueva época de violencia para Colombia. Unas fortalecidas FARC iniciaron una nueva escalada de terror y su plan estratégico era la toma del poder en la capital⁷, con armas suministradas, según datos de la *Revista Semana* (2012), por los carteles mexicanos, como contrapartida a los cargamentos de pasta básica de cocaína y heroína enviados desde otros países como Ecuador. Dicho plan fue frustrado por la seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe.

4 La Catedral fue el establecimiento carcelario creado para mantener tras las rejas a Pablo Escobar y sus amigos, luego de su entrega voluntaria a las autoridades tras la firma de la Constitución de 1991. En dicho lugar se llevaban a cabo fiestas, orgías y asesinatos. La cárcel fue construida bajo las especificaciones del capo.

5 Perseguidos por Pablo Escobar, un grupo fundado por Fidel Castaño, desaparecido jefe paramilitar, que se levantó en contra de la población civil. Patrocinado por industriales, políticos, ganaderos, etc.

6 Se denominó “proceso 8000” por el número del consecutivo judicial asignado a la investigación, también fue conocido como “*el elefante de la mafia*”. El término *elefante* fue acuñado por el entonces cardenal primado de Colombia Pedro Rubiano Sáenz, quien señaló que el hecho de que Samper afirmara no estar enterado del ingreso de dichos dineros a su campaña era como si hubiera entrado un elefante a la sala de su casa sin ser visto.

7 Dicho plan fue denominado “Toma a Santa Fe de Bogotá”, en el cual se pretendía tener sitiada a Bogotá para el año 1996.

Contrario al asunto de las guerrillas en Colombia está el paramilitarismo (autodefensas), fenómeno que surgió como contrapeso a aquellos sistemas que atentaban contra la sociedad colombiana, pero terminó convirtiéndose en el causante del 60 % de las masacres y del 40 % de los asesinatos selectivos en Colombia (*Revista Semana* y Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Su lucha sin cuartel contra las guerrillas de izquierda en el país fue totalmente sanguinaria y en varias ocasiones su violencia superó a las acciones de las guerrillas.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Gobierno nacional, en el informe ejecutivo del proceso de paz con las autodefensas del año 2006, tras los diálogos con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez que se inició a finales del 2002 las AUC entregaron las armas. En ese año, se desmovilizaron 30 944 paramilitares en todo el país y fueron entregadas más de 17 564 armas. Los altos mandos se sometieron a la justicia transicional y algunos de ellos hoy en día purgan condenas por sus actos. Sin embargo, los disidentes continúan delinquir en el país, financiados por el narcotráfico y luchando por su control, son lo que se conoce hoy como las “bacrim”⁸.

En 2006, tras un bajonazo en el consumo de sustancias alucinógenas en Estados Unidos y un mayor desarrollo estatal en México, se generó una cierta incertidumbre entre los carteles que desembocó en enfrentamientos por el control de espacios territoriales y se recrudeció la violencia en este país, de modo que la misma sociedad, que hasta el momento había estado al margen de la situación, comenzó a sentir el impacto de dicha transformación. Según cifras, en el lustro comprendido entre el 2007 y el 2011 murieron violentamente en México 51 501 personas, que en su mayoría estaban implicadas en el narcotráfico, y a pesar del esfuerzo del Estado, el 85 % de los homicidios

fueron perpetrados por los carteles (Fernández-Montesinos, 2017).

Los índices de asesinatos de líderes sociales en Colombia son preocupantes. Para el 23 de mayo de 2019, 702 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC habrían sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz en el 2016 (Laverde, 2019). En México, la ciudad de Acapulco, en las costas del océano Pacífico, ha dejado de ser un paraíso para los turistas; según un informe de la BBC (2018), es la tercera ciudad más violenta del mundo, los asesinatos por año ascienden a 910 y la tasa de homicidios es de 106,63 por cada mil habitantes; solo superada por Los Cabos en México y por Caracas en Venezuela.

Frente a los constructos hegemónicos del poder que posicionaron la violencia como una característica transversal en el ethos del cotidiano colombiano, es necesario generar una narrativa de vida capaz de liberar, visibilizar y reconciliar frente al conflicto (Nieto et al., 2019) para constituir lógicas de sentido (Nieto, 2017). La sociedad necesita respuestas de resistencia frente a las formas sistemáticas de violencia que la afectan para también desarrollar un rol resiliente, el cual, aparte de resistir, implica la superación de las dificultades y el planteamiento de opciones de cambios estructurales que respondan a las problemáticas ya planteadas.

EL IMAGINARIO SOCIAL

La sociedad colombiana se enmarca en paradigmas que legitiman el crimen y la violencia, siempre y cuando estos flagelos no la afecten y sean en cierta medida beneficiosos para ella. En muchos casos, los capos del narcotráfico, la narcoguerrilla y el narcoparamilitarismo han sido convalidados

8 Bandas criminales que surgen de grupos disidentes del paramilitarismo.

por la población civil ante todo por el ausentismo del Estado en los territorios y también por la promesa de protección de estos grupos.

El discurso de Escobar era de pueblo, cercano a las necesidades de los pobres y necesitados, de los barrios marginales, a quienes beneficiaba con programas de vivienda y alimentación; muchos ciudadanos colombianos lloraron su muerte y sus arengas en el funeral eran en contra del Estado, al cual tildaron de asesino.

Lo mismo sucedía en el caso de Gonzalo Rodríguez Gacha “El Mexicano” en Pacho, Cundinamarca, su pueblo natal, donde repartía dinero y mercados a la población (Gómez y Sánchez, 2008). No es muy diferente esta cuestión en las calles del municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, donde las anécdotas cuentan que el Chapo se paseaba por allí como un testigo de Dios, apadrinando bautizos, primeras comuniones y bodas. Para los pobladores de esta zona, no hay duda de su generosidad (Hernández, 2010).

En México y Colombia, por lo general, los jóvenes que habitan en zonas de influencia del narcotráfico construyen su noción de éxito con base en el modelo de los capos, es decir, los niños no sueñan con ser médicos o bomberos, sino con seguir sus pasos (Hernández, 2010). En una ciudad como Sinaloa, los narcotraficantes se pasean en lujosas camionetas, tienen grandes propiedades, poder, mujeres y dinero, incluso mausoleos de miles de dólares, por tanto, los niños suelen aspirar a hacer parte de eso (Fox, 2018).

LA ECONOMÍA TERRITORIAL DE DOS ESTADOS SOSTENIDOS POR EL NARCOTRÁFICO

Según Velasco et al. (2018), en Colombia hay toda una transformación social y cultural que gira en torno al cultivo de la droga en las regiones. Este cambio sugiere el reemplazo de las economías tradicionales basadas en los productos de carácter primario. A la par, van surgiendo hombres poderosos que se encargan de manejar las guerras y de apoyar a un grupo de corte político que usa recursos del narcotráfico para el financiamiento de sus campañas con aspiraciones a cargos públicos. Los resultados son gobiernos locales que basan su ejercicio, aparentemente democrático, en el capital de las drogas y cuya ley es la violencia con la cual imponen el orden territorial.

Dicha transformación de la oligarquía se fue dando a escalas diferentes según el territorio; primero, en ciudades como Medellín, donde el capital generado por el narcotráfico no causó afectación en las estructuras oligárquicas que se mantuvieron en el poder. En un segundo contexto, las oligarquías tampoco se vieron afectadas por los procesos de guerra surgidos a partir de la producción de sustancias alucinógenas, sino que existió una especie de adaptación del narcotráfico a la oligarquía tradicional. En el tercer plano, donde están los pueblos con escasas o nulas oligarquías, fueron los paramilitares y los narcotraficantes (que muchas veces eran los mismos) quienes asumieron el poder oligárquico y dominaban en estos territorios, como en el caso de Muzo⁹, en el occidente de Boyacá (Velasco et al., 2018).

9 Muzo es el principal municipio de Colombia productor de esmeraldas. Es un municipio periférico con más de 9000 habitantes que se encuentra aún desconectado de las principales redes de acceso vial. Se le conoce como la capital mundial de las esmeraldas, aunque su población en la mayoría de los casos vive en pobreza extrema.

Estas oligarquías que se asentaron en los municipios del occidente de Boyacá, región conformada por doce municipios, se hicieron a dos negocios verdes: la esmeralda y la coca, que causaron tragedias, muerte y desolación, y establecieron la denominada “guerra verde” que cobró 2312 víctimas según datos del Registro Único de Víctimas (2019); esas son las víctimas registradas a la fecha, pero al parecer el estimado de personas que murieron entre 1965 y 1990 es mayor.

Además, no solamente los sectores políticos y territoriales fueron permeados por el narcotráfico, sino incluso las mismas instituciones encargadas de velar por la seguridad y la lucha contra este fenómeno. En su tiempo, el DAS se vio implicado en el tráfico de drogas; lo mismo sucedió con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, que estuvieron comprometidos con operaciones de contrabando. Tal vez el caso más famoso de corrupción estatal se dio en 1984 con la valija diplomática en la Embajada de Colombia en Madrid, remitida con regularidad desde la misma Secretaría particular del presidente Belisario Betancur y cuyo contenido eran cargamentos de cocaína. Para ese momento, los ingresos por cuenta de sustancias alucinógenas ya superaban los ingresos nacionales por otros productos (Escohotado, 1998).

El caso mexicano es similar. Así lo atestiguan escritos al respecto en los que la Policía, por cuenta de estrechas similitudes de su realidad con la de los narcotraficantes, mantiene una profunda empatía con ellos. Esto se hace evidente, por ejemplo, en el caso del Chapo Guzmán, quien fue capturado por Jorge Carrillo Olea en 1993, pero logró

evadirse del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco ayudado por Jorge Enrique Tello, un hombre de confianza de Carrillo Olea. Según versiones del mismo capo: “en este mundo de complicidades y traiciones, un día tu mejor amigo es tu cómplice y al otro se convierte en tu peor enemigo” (Hernández, 2010, p. 22).

Sin embargo, en países como Colombia y México, en términos económicos, acabar con las exportaciones de drogas supondría una catástrofe, a pesar de que por lo general los beneficios de este comercio son recaudados en bancos de Europa o son reinvertidos en Estados Unidos. Según un informe realizado por entidades del Estado norteamericano, México y Colombia obtienen un total del 75 % de sus ingresos por la exportación de marihuana y cocaína (Escohotado, 1998).

En su columna “Cocalombia: ¿qué pasaría si un hongo mata la coca por 30 años, como sucede hoy con el banano?” (*El Tiempo*, 18 de agosto de 2019), Paola Ochoa plantea una hipótesis interesante. Según afirma, la economía colombiana estaría totalmente en riesgo, sobre todo los negocios que dependen directa o indirectamente del narcotráfico; también, desaparecerían las estructuras que siembran violencia en el país y que se sostienen por los mismos recursos. Desaparecerían las manifestaciones de la problemática social, como lo son las casas de pique¹⁰, el microtráfico, los jíbaros¹¹, los de la moto¹², el despojo de tierras y el desplazamiento de campesinos, incluso los falsos positivos¹³ dejarían de ser necesarios.

10 Las “casas de pique” fueron descubiertas en Bogotá, en la calle del Bronx, lugar donde eran descuartizadas vivas personas que tenían cuentas pendientes con grupos que delinquían en el lugar.

11 Así son también conocidos los narcotraficantes en Colombia y Venezuela.

12 Este es uno de los fenómenos generados por el narcotráfico más destacados en Colombia. El sicario se desplaza en una motocicleta y ajusticia a su víctima como método de cobro de deudas a aquellos que no cumplen sus compromisos.

13 Denominación en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por altos cargos militares bajo órdenes estatales.

LA REALIDAD ACTUAL

Los intereses de ciertos Estados con estrategias geopolíticas saltan a la vista; amparados bajo el pretexto de una lucha contra las drogas mantiene su injerencia en otros países lo cual les garantiza mantener el monopolio regional. La supuesta utopía de un paraíso luego de que se erradique al enemigo común es cada vez menos posible mientras exista la conveniencia de mantener las drogas en su estatus de prohibición. Los recursos empleados para la erradicación de cultivos ilícitos no son más que una buena inversión que redunde en beneficio de sus inversores (García, 2010).

Debido a muchas circunstancias, la guerra es más conveniente que la paz. Durante décadas, Estados Unidos ha ostentado el estandarte en contra del narcotráfico a escala mundial y, por su parte, Colombia —que en este caso mantiene el estigma de ser el principal país productor de coca del mundo— no ha hecho otra cosa que obedecer sin restricciones a las sugerencias y órdenes de las instituciones antidrogas de Estados Unidos en aras de mantener la “certificación” correspondiente. Por ello, es relevante un ejercicio hermenéutico sobre este espectro de comprensión (Pérez et al., 2019). Después de la Guerra Fría, el país norteamericano encontró en el narcotráfico la mejor herramienta para mantener su injerencia sobre los países de América Latina; incluso las guerrillas, que se dicen opositoras al intervencionismo estadounidense, son narcotraficantes, usan armas norteamericanas y les dan mayores razones a Estados Unidos para mantener su dominio (García, 2010).

El acuerdo de paz con las FARC firmado en 2016 planteó una nueva posibilidad para la sociedad colombiana. En el punto cinco, contempla la necesidad de solucionar el problema de las drogas ilícitas, que incluye su cultivo, producción y comercialización. El planteamiento está basado en una nueva visión que busca generar procesos distintos a los que hasta la fecha se han empleado para combatir

los cultivos ilícitos, y también la violencia asociada a estos, con un enfoque centrado en los derechos humanos y la salud pública, diferenciado y de género.

Sin embargo, la realidad contrasta con las expectativas. Mientras que el Acuerdo Final reza lo ya mencionado, a la fecha en Colombia los territorios con cultivos ilícitos han aumentado 3,4 veces desde el 2012 cuando se iniciaron los diálogos de paz en la Habana; es decir que se pasó de 47 788 hectáreas con cultivos de coca a 169 000, según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Observatorio de Drogas de Colombia, 2019).

Frente a un panorama tan poco alentador, pareciera que a pesar de los esfuerzos realizados la sociedad colombiana fuera a desfallecer, y más aún cuando personajes firmantes del acuerdo de paz han tomado la decisión de alzarse nuevamente en armas para emprender una nueva lucha armada en contra del Estado colombiano. Esto tiene un trasfondo mayor que conecta a los dos países referidos en este documento, puesto que las disidencias de las FARC venden cocaína a los carteles mexicanos, que por su parte subsidian con armamento a los disidentes (Laverde, 2019).

Sin embargo, los procesos de desmovilización de excombatientes de las FARC parecen ser evidencia de que a pesar de las advertencias de alzamiento en armas de aquellos que insisten con la guerra, hay una gran mayoría que está dispuesta a continuar en su lucha por la paz. Ante el evidente desarme y desarticulación de esta población, el reto es mayor para el Estado, toda vez que este proceso solo es la parte inicial de una cadena que debe llevar a un retorno a la vida civil y las políticas que establezca deben estar enfocadas en garantías de un desarrollo humano integral para los excombatientes de las FARC que les garanticen realmente dicha posibilidad (Nieto y Pardo, 2018).

Tras casi cuarenta años de recorrido histórico a través de documentos que son testigos de la barbarie de una guerra subsidiada por un negocio tan próspero como el del narcotráfico, que mueve cada año más de 90 000 millones de dólares (Fox, 2018), parece no existir ninguna posibilidad de que los Estados colombiano y mexicano hagan algo en contra de estas estructuras que, más que una cadena, son redes estratégicas de cultivo, producción y comercialización de sustancias estupefacientes distribuidas en todo el mundo. Este proceso requiere de un ejercicio de investigación emergente, en el que puedan visibilizarse las voces primarias de los sujetos que se ven afectados por los cambios sociales (Santamaría et al., 2019).

CONCLUSIONES

El fenómeno del narcotráfico ha sido abordado a lo largo de su historia de una manera inapropiada, hasta el punto de reincidir una y otra vez en los mismos errores del pasado. Los sucesos de los años ochenta en Colombia, que demostraron el poder del narcotráfico frente a un Estado fragmentado y permeado por este, parecieran revivir en México, un país donde las fuerzas del Estado parecen débiles frente al arsenal y el poder de los sicarios de los carteles, quienes en algunas ciudades son la ley y el orden. Esto es en gran medida porque no ha cambiado el paradigma con que se ha interpretado la lucha contra el narcotráfico, y se sigue creyendo que su estructura es similar a una cadena, en la cual al romper un eslabón se fragmenta el proceso y desaparece. Es importante que los Estados que luchan contra este problema lo aborden desde una perspectiva de red, en la cual son múltiples los procesos y los actores que interactúan unos con otros incluso sin conocerse directamente.

Otro aspecto relevante en esta realidad del narcotráfico es el proceso de deshumanización que afrontan los ciudadanos de las naciones

involucradas, hasta el punto de normalizar la guerra de manera tal que los pueblos no se movilizan ni se conmueven ante el dolor de los demás.

El crimen y la violencia, que son los instrumentos de miedo que emplean los grupos que se benefician del narcotráfico, se han convertido en lo obvio dentro de estos países; es normal una masacre o encontrar cuerpos desmembrados en las calles y todo ello nutre la mirada amarillista de una sociedad que encuentra en las manifestaciones de la violencia una especie de deleite y satisfacción. Es importante volver la mirada ante estos fenómenos y comenzar a problematizar todo aquello que se manifiesta como común y obvio ante la sociedad.

REFERENCIAS

- BBC Mundo. (2018, 7 de marzo). *Estas son las 50 ciudades más violentas del mundo*. (y 42 están en América Latina). <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43318108>
- Escotado, A. (1998). *Historia general de las drogas*. Espasa.
- Fernández-Montesinos, F. (2017). Recensión del libro "Historia del narcotráfico en México" de Guillermo Valdés Castellanos. *Boletín IEEE*, (8), 326-344. http://www.ieee.es/publicaciones-new/boletines_IEEE/2017/BoletinIEEE_8.html
- Fox, J. (2018). *Entre los verdaderos narcos* [película]. Netflix. <https://www.netflix.com/watch/80992882?trackId=200257859>
- García Pulgarín, Á. (2010). Narcotráfico en Colombia: un problema creado en otra parte, importado y asumido como propio. *Estudios de Derecho*, 69(149), 261-281. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/8637>

- Gómez, M. y Sánchez Cristo, J. (2008). *¡Colombia vive! 25 años de resistencia* [película]. Caracol Televisión. <https://www.youtube.com/watch?v=yZ79B4f5WFI>
- Gómez Roldán, A. (2011). El movimiento de la séptima papeleta frente al referendo: posición jurídica de la Corte Constitucional de una generación de colombianos que ayudaron a construir la Constitución Política de Colombia. *Papel Político*, 16(2), 365-380. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-44092011000200002&lang=es
- González Higuera, S., Colmenares Vargas, J. C. y Sánchez Vargas, V. (2011). La resistencia social: una resistencia para la paz. *Hallazgos*, 8(15), 237-254. <https://doi.org/10.15332/s1794-3841.2011.0015.12>
- Hernández, A. (2010). *Los señores del narco*. Random House Mondadori.
- Laverde Palma, J. D. (2019, 21 de septiembre). Radiografía de las disidencias de las Farc. *El Espectador*. elespectador.com/noticias/judicial/radiografia-de-las-disidencias-de-las-farc-articulo-882226
- Lemaitre Ripoll, J. (2016). *El movimiento estudiantil de 1989 y la Séptima Papeleta*. Proyecto "De toda la gente. la Asamblea Nacional Constituyente 1991-2016", Banco de la República. <https://proyectos.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente/es/texto-catalogo/movimiento-estudiantil-1989-y-la-septima-papeleta>
- Méndez, M. (2009). El impacto del narcotráfico en el ámbito político. La cadena narco: Amenaza para la democracia y la gobernabilidad. *Mapa del narcotráfico en el Perú*, 43-58. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/39934/2_impacto_politico.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Nieto Bravo, J. A. y Pardo Rodríguez, J. P. (2018). Desarme, desmovilización y reincorporación social en Colombia. *Revista de la Universidad de la Salle*, 157-177. <https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=2177&context=ruls>
- Nieto, J. A. (2017). Del contractualismo igualitario al desarrollo humano diferencial: una perspectiva de justicia desde el enfoque de capacidades humanas en el proceso de retorno a la vida civil de desmovilizados en Colombia. En *Revista Hallazgos*, 14(28), pp. 83-104. <https://doi.org/10.15332/2422409X>
- Nieto Bravo, J. A., & Pardo Rodríguez, J. P. (2018). Del contractualismo igualitario al desarrollo humano diferencial: una perspectiva de justicia desde el enfoque de capacidades humanas en el proceso de retorno a la vida civil de desmovilizados en Colombia. *Revista Hallazgos*, 14(28), 83-104. <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/hallazgos/article/view/4339/4103>
- Nieto Bravo, J. A. Angarita Mendoza, M. A., Muñoz Velásquez, J. D. y Labrador Mancilla, G. A. (2019). La investigación narrativa como construcción social del conocimiento, una aproximación epistemológica y metodológica desde el enfoque cualitativo. En *Revista Hojas y Hablas*, (17), 58-73. <https://doi.org/10.29151/hojasyhablas.n17a4>
- Observatorio de Drogas de Colombia (ODC). (2019). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018. *Observatorio de Drogas de Colombia*. <http://www.odc.gov.co/problematika-drogas/oferta-drogas/cultivos/>
- Ochoa, P. (2019, 18 de agosto). Cocalombia: ¿qué pasaría si un hongo mata la coca por 30 años, como sucede hoy con el banano? *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/paola-ochoa/cocalombia-columna-de-paola-ochoa-402318>

- Oficina del Alto Comisionado Para la Paz. (2016, 26 de junio). *Colombia: Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*. <https://www.refworld.org/es/country,LEGAL,NATLEGBOD,BILATERALTREATY,COL,,5a8744d54,0.html>
- Pérez, J. J., Nieto Bravo, J. A., & Santamaría-Rodríguez, J. E. (2019). La hermenéutica y la fenomenología en la investigación en ciencias humanas y sociales. *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, 19(37). <https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh/article/view/1248>
- Presidencia de la República. (2006). *Proceso de paz con las Autodefensas. Informe ejecutivo. Oficina del Alto Comisionado para la Paz*. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9DEF64898DC8E5DEC1257195003707C0-govt-col-19jun.pdf>
- Puente, Á. M. (2008, 29 de octubre). *Bonanza Marimbera 1976-1985. Verdad Abierta*. <https://verdadabierta.com/bonanza-marimbera-1976-1985/>
- Puerta, E. y Vásquez, M. (2012). Concepto de resiliencia. *Caminos para la Resiliencia*, 1(2). http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/8053e5b2-7d04-4997-9dc0-4dca-da70658f/BoletA%CC%83%C2%ADn+2_Concepto+de+Resiliencia.pdf?MOD=AJPERES
- Radio Nacional de Colombia. (2016, 29 de noviembre). *Narcopolítica: el Proceso 8000*. <https://www.radionacional.co/linea-tiempo-paz/narcopolitica-proceso-8000>
- Revista Semana y Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2013). *La escalada de la violencia y sus responsables*. <https://especiales.semana.com/especiales/escala-violencia-colombia/>
- Roa Suárez, H. (2009). Luis Carlos Galán el más importante político de su generación. *Universitas*, 58(119), 27-34. <http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n119/n119a07.pdf>
- Sáenz Rovner, E. (1996). La prehistoria del narcotráfico en Colombia. Serie documental: desde la Gran Depresión hasta la Revolución Cubana. *Innovar*, (8), 65-92. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/19259>
- Santamaría-Rodríguez, J. E., Nieto Bravo, J. A., Quitián Álvarez, E. A. (2019). Formación en investigación pedagógica desde metodologías emergentes. Inferencias epistémicas en perspectiva pedagógico-crítica. *Revista Electrónica: Entrevista Académica*, 1(4). <http://www.eumed.net/rev/reea/agosto-19/investigacion-pedagogica.html>
- Unidad para las Víctimas. (2019). *Víctimas conflicto armado*. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>
- Velasco, J. D., Duncan, G. y Lopera, F. (2018). Oligarquía, poder político y narcotráfico en Colombia: los casos de Medellín, Santa Marta y Muzo. *Colombia Internacional*, (95), 167-201. <https://doi.org/10.7440/colombiaint95.2018.07>